**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se informan los pasivos contingentes con que cuenta el Municipio de Mérida, los cuales no se encuentran registrados contablemente, debido a que las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”.

A la fecha en que se emite la presente existen los siguientes pasivos contingentes:

1.- Del Departamento Contencioso de la Subdirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección de Gobernación del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentran los siguientes:

* **Expediente número 10,388/2001 (Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado.**

Juicio Ordinario Civil promovido por las Arq. Wendy Lorena Estrada Magaña y Adriana del Carmen Bobadilla Tugores, en contra del H. Ayuntamiento de Mérida, la Dirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Proyectos de la Dirección de Desarrollo Urbano, de la Arquidiócesis de Yucatán, Asociación Religiosa, de la Parroquia de Cristo Obrero y de la Comisión Diocesana de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán.

Prestación reclamada.- El cumplimiento del ofrecimiento de la premiación del concurso del Centro Pastoral Litúrgico de Usos Múltiples denominado la “Cátedra de San Pedro” ubicado en el parque de la visita del Fraccionamiento Juan Pablo II de esta Ciudad.

Estado procesal actual.- Ejecución de sentencia. El Ayuntamiento de Mérida fue sentenciado a pagar los honorarios o estipendios que legal y arancelariamente procedan y que debieron devengar las actoras.

El proceso se está defendiendo arduamente toda vez que la parte actora pretende la cantidad de $8,145,420.00 (Ocho millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) Equivalente al 15% de honorarios por utilidad, de conformidad al dictamen rendido por el perito de dicha parte actora, dictamen que no se encuentra ajustado a lo sentenciado por la Autoridad respectiva.

* **Expediente número 556/2011 (Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado)**

Juicio Ordinario Civil promovido por René Alejandro Cruz Jiménez y Sandra Luz del Socorro González Sánchez, en representación de la patria potestad del menor Eduardo René Cruz González en contra de los señores William René Reyes Maldonado y Héctor Alba Rodríguez, de Navashow, Sociedad Anónima de Capital Variable, del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, del Director del Departamento de Espectáculos de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (sic).

Prestación reclamada.- El pago de la cantidad aproximada de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) en concepto de reparación por daño material de responsabilidad civil por los daños sufridos por el menor Eduardo René Cruz González, quien cayó de un juego mecánico propiedad de la empresa Navashow.

Estado procesal actual.- Desahogo de pruebas.

El proceso se está defendiendo arduamente, toda vez que se considera que el Ayuntamiento de Mérida no tiene responsabilidad alguna por el daño sufrido por el menor, ya que los permisos otorgados a la empresa Navashow por parte del Titular del Departamento de Espectáculos del Ayuntamiento de Mérida, se encuentra ajustado a la normatividad, aplicable en el tiempo en que sucedieron los hechos.

* **Expediente número 893/2013 (Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado)**

Juicio Ordinario Civil promovido por Rubén Darío Bojórquez Patrón, Eduardo José Bojórquez Patrón, en contra de María Angélica Herrera Lizcano, Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, Yucatán, Antonio Siva García, Diego Alonzo Cetina Gómez, Alfredo I. Pinelo Cámara, la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, Yucatán, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida.

Prestación reclamada.- La indemnización en dinero aproximadamente por la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) por el daño causado y ocasionado, consistente en todos y cada uno de los gastos y erogaciones que la parte actora tuvo que erogar como consecuencia directa y necesaria para la defensa legal de sus intereses ante los actos de amenaza de clausura, llevados a cabo por los demandados.

Estado procesal actual.- Desahogo de pruebas.

El proceso se está defendiendo arduamente, toda vez que se considera que la clausura realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano se encuentra ajustada a la normatividad, aunado a que el estado de quiebra de la empresa actora obedece a actos ajenos al Ayuntamiento de Mérida, por lo que se considera poco probable la procedencia de la presente acción.

* **Expediente número 277/2012 (Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado)**

Juicio Ordinario Civil promovido por María Cristina Pech Sierra en contra del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y H. Ayuntamiento de Mérida.

Prestación reclamada.- La prescripción del inmueble número noventa y tres “A” de la calle treinta y dos por tres “A” y tres “D” de la colonia Pensiones de esta Ciudad, propiedad del H. Ayuntamiento de Mérida.

Estado procesal actual.- Alegatos

El proceso se está defendiendo arduamente, toda vez que se considera que no es procedente la prescripción solicitada, por cuanto el inmueble está considerado como del fundo legal, cabe mencionar que el monto demandado será cuantificado hasta la ejecución de la sentencia del juicio.

* **Expediente número 56/2017 (Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado)**

Juicio Ordinario Civil promovido por Ignacio Rafael Molina Zaldívar, alias Ignacio Molina, en contra del Ayuntamiento de Mérida, la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mérida, Mauricio Vila Dosal y Virgilio Augusto Crespo Méndez.

Prestación reclamada.- El pago de la indemnización por los daños ocasionados por los demandados a un predio propiedad de la parte actora, el pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados por las autoridades municipales demandadas, y los gastos y costas del juicio de referencia. El pago que hasta el momento se tiene considerado en el avaluó ofrecido por la actora en los autos del juicio de que se trata asciende a la cantidad de $ 714,000.00 (Setecientos catorce mil pesos 00/100 M.N.) Cantidad que aún se encuentra por confirmar por la autoridad judicial.

Estado procesal actual.- Desahogo de Pruebas.

El proceso se está defendiendo arduamente toda vez que la parte actora pretende una indemnización de un predio supuestamente de su propiedad; sin embargo el Municipio de Mérida es propietario de un inmueble que posiblemente se encuentre en traslape con el predio del actor, el monto total será cuantificado hasta la ejecución de la sentencia del juicio.

* **Expediente número 585/2017 (Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado)**

Juicio Ordinario Civil promovido por la persona moral denominada “Sistemas Integrales de Seguridad y Telecomunicaciones”, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de Erika Guadalupe Escalante Rubio, en su carácter de apoderada, en contra del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida.

Prestación Reclamada.- El pago de la cantidad de $8,161,677.18 (Ocho millones ciento sesenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos 18/100 M.N.), más el importe del Impuesto al Valor Agregado, en concepto de suerte principal, el pago de intereses al tipo legal sobre la suerte principal reclamada y al pago de costas y gastos del presente juicio.

Estado procesal actual.- “Sistemas Integrales de Seguridad y Telecomunicaciones”, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió Juicio de Amparo Directo en contra de la resolución de segunda instancia en el cual se emitió sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones, expediente marcado con el número 217/2020.

El H. Ayuntamiento de Mérida promovió Juicio de Amparo en contra de la resolución de segunda instancia que revoco la resolución de primera instancia en el cual no favorece nuestros intereses

El proceso se está defendiendo arduamente toda vez que la parte actora pretende el pago de dinero de facturas, las cuales no han acreditado el cumplimiento de la obligación por las cuales fueron expedidas.

* **Expediente número 109/2014 (Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán)**

Juicio Contencioso Administrativo, promovido por William Alberto Chan Arreola, en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida y Director de Gobernación.

Prestación reclamada: El pago de los daños y perjuicios ocasionados por la caída de un árbol.

Estado Procesal Actual.- Con fecha 08 de Noviembre del año 2016, se verificó la audiencia de pruebas y alegatos, sin que hasta la presente fecha se haya emitido resolución. De manera oportuna se emitió contestación a la demanda y se ofrecieron las pruebas pertinentes. El proceso se defendió arduamente toda vez que la parte actora pretende el cobro de la cantidad de $131,452.84 (ciento treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 84/100 M.N.)

* **Expediente número 272/2015 (Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán)**

Juicio Contencioso Administrativo, promovido por Emma Torres Arcila, en contra del Ayuntamiento de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.

Prestación reclamada: La nulidad de la inmatriculación por resolución administrativa por medio de la cual incorporan al Patrimonio Municipal de Mérida, a través de su ayuntamiento, la vialidad marcada como “calle número 79 diagonal (vialidad) de la colonia Sodzil Norte del Municipio de Mérida, Yucatán.

Estado Procesal Actual.- Se difiere la audiencia de pruebas y alegatos para el día 13 de Octubre del año 2020 a las 10:00 horas.

El proceso se está defendiendo arduamente toda vez que la parte actora afirma que con la construcción de la vialidad en cita se invadió terrenos de su propiedad. En caso de resolución desfavorable al Ayuntamiento de Mérida, se tendría un pasivo por la cantidad de $7,253,659.00 (Siete millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) misma que constituye el monto del valor catastral de la vialidad ya citada.

* **Juicio de luminarias.**

El veintidós de abril de dos mil trece, el H. Ayuntamiento de Mérida, da por terminado anticipadamente el Contrato de Arrendamiento derivado de la Licitación Pública DA-2011-LUMINARIAS-01-01 adjudicado a la empresa AB&C Leasing de México, S.A.P.I., de C.V., misma que interpone demanda de Nulidad en Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en contra del Acuerdo anterior, al que se le asignó el número de expediente 119/2013.

En sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil catorce, notificada hasta el día quince de marzo de dos mil quince, el Tribunal, declaró la nulidad de la resolución administrativa de fecha veintidós de abril de dos mil trece, condenó al Ayuntamiento de Mérida a que pague de inmediato a la empresa arrendadora AB&C Leasing de México, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, la cantidad de $203,155,906.66 (Doscientos tres millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos seis pesos 66/100 M.N.).

Inconforme con lo anterior el Ayuntamiento de Mérida, interpone Juicio de Amparo Directo en contra de la resolución de fecha cinco de marzo, obteniéndose la suspensión de la ejecución de la misma.

Del juicio de amparo corresponde conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien por medio de su magistrado Presidente, lo admitió a trámite por auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, con número de expediente 414/2015.

El día nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerce su facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo 414/2015, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente) y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Estuvo ausente el Señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Por acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca a conocer de la demanda de amparo 414/2015, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, asignándole el número 5/2017, turnándose el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala.

En la sesión de fecha 12 de julio de 2017, el Ministro Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, presentó el proyecto de resolución de amparo, en el que lo admitía y concedía, sin embargo los ministros votaron en contra del proyecto, por lo que se determinó sobreseer el mismo, quedando firme la resolución de fecha cinco de marzo del año dos mil catorce.

El monto a pagar en su caso sería de aproximadamente $250,000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), no se omite manifestar que hasta la presente fecha en el expediente en que se actúa no se ha presentado la planilla de liquidación correspondiente por parte de la actora, en el procedimiento de ejecución.

ABC LEASING, cedió sus derechos de cobro de las rentas referidas con anterioridad a Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, siendo que éste a su vez promovió Juicio Ordinario Mercantil ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Distrito Federal con número de expediente 498/2013-IV del cual se emitió sentencia condenatoria, condenando a pagar al Ayuntamiento de Mérida la cantidad de $588,761,081.17 (Quinientos ochenta y ocho millones setecientos sesenta y un mil ochenta y uno pesos 17/100 M.N.).

Por parte del Ayuntamiento de Mérida se promovió Juicio de Amparo Indirecto con número de expediente 65/2019, que se tramita ante el Tribunal Unitario en Materia Civil, Administrativa y Especializada, en contra del pago de la cantidad de $588,761,081.17 (Quinientos ochenta y ocho millones setecientos sesenta y un mil ochenta y uno pesos 17/100 M.N.) concediéndose suspensión definitiva para el efecto de que se efectué nuevamente la planilla de liquidación.

En contra de dicha resolución Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, interpuso Recurso de Revisión con número de expediente 367/2019 que se tramita ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que se encuentra pendiente de resolver.

Toda vez que se advierte de lo mencionado con anterioridad, que existen dos procedimientos de ejecución para el cobro de las rentas a que se refiere el contrato suscrito entre el Municipio de Mérida con ABC LEASING, le informo que actualmente se encuentra pendiente de resolver el Amparo en Revisión ante el Colegiado en Materia Penal y Administrativo, derivado del Juicio de Amparo Indirecto número 877/2019 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito. Se emitió sentencia en el Juicio de Amparo 877/2019, se solicitó el cumplimiento al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual por acuerdo de fecha 18 de marzo de 2020 reconoció a Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, el carácter de cesionario de los derechos al cobro de rentas derivados del contrato de arrendamiento con opción a compra número DA-2011-LUMINARIAS-01/01 como lo solicita en el escrito de fecha 12 de abril de 2018. Siendo que actualmente el Juzgado Quinto de Distrito otorgó 15 días hábiles a las partes, para manifestar su inconformidad en los términos en que el Tribunal Contencioso cumplió con la sentencia de Mérito.

* **Expediente número TUA 34-704/2019 (Tribunal Unitario Agrario Distrito 34)**

Juicio Agrario, promovido por representantes del comisariado ejidal de Chuburná, en contra del Ayuntamiento de Mérida.

Prestación reclamada: Restitución a favor del ejido de Chuburná del tablaje catastral número 362118.

Estado Procesal Actual.- Con fecha 04 de febrero del año 2020 se compareció a la Audiencia de Ley, misma que se difirió, fijándose nueva fecha el día 19 de mayo del año 2020 a las 12:00 horas.

El proceso se está defendiendo arduamente, no existiendo monto estimado en el presente Juicio.

* **Expediente número 723/2019 (Tribunal Unitario Agrario Distrito 34)**

Juicio Agrario, promovido por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), en contra del Ayuntamiento de Mérida.

Prestación reclamada: La reversión de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto de la superficie de 17-14-12.00 hectáreas, correspondiente a la totalidad de la superficie expropiada o las que resulten de manera parcial, que se hayan destinado a un fin distinto para el que fueron expropiadas o que se hayan dejado de dar cumplimiento a la causa de utilidad pública, invocada en el Decreto Presidencial de fecha 22 de febrero de 1980, mediante el cual se expropio dicha superficie de terrenos al ejido denominado “CAUCEL Y ANEXOS” del municipio de Mérida, a favor del Ayuntamiento de Mérida.

Estado Procesal Actual.- Se realizó el emplazamiento del juicio, y se encuentra pendiente la audiencia de ley que tendrá verificativo el 12 de marzo de 2020.

El proceso se está defendiendo arduamente, no existiendo monto estimado en el presente Juicio.